

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 20º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-6220-2024
CARATULADO : CASTILLO/FISCO - C.D.E.

Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro

VISTOS:

Al folio 1, comparecen Hugo Gutierrez Galvez, Ramiro Ignacio Gutiérrez Acuña, y Yolanda Berena Milanca Nahuelhualque, todos abogados, domiciliados en Paseo Bulnes N°216, oficina 901, comuna de Santiago, en representación de doña Liliana María Castillo Rogers, jubilada, domiciliada en Los Carrera N°1680, comuna de Quilpué, Región de Valparaíso; quienes interponen demanda de indemnización de daños y perjuicios en juicio ordinario, en contra del Fisco de Chile, representado por don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1225, piso 4°, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Al folio 8, consta la notificación del demandado.

Al folio 13, se contestó la demanda.

Al folio 17, se evacuó la réplica.

Al folio 19, se evacuó la réplica.

Al folio 22, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que rolan en autos, notificándose a las partes con fecha 09 y 12 de julio de 2024.

Al folio 30, se resolvió recurso de reposición contra la resolución que recibe la causa a prueba.

Al folio 40, se citó a las partes a oír sentencia.

Al folio 41, el Tribunal decreto medida para mejor resolver.

CONSIDERANDO.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXHKXRDEWKX

Foja: 1

PRIMERO: Que, la actora relata que el 13 de septiembre de 1973, a dos días del golpe militar, doña Liliana María Castillo Rogers, que era una joven de 19 años en ese momento; estudiante de la Universidad Técnica Federico Santa María; sufrió un impacto de bala en su pierna izquierda por parte de un funcionario de la Armada de Chile. Detalla, que el incidente ocurrió en la localidad de San Francisco de Limache, donde residía con sus padres y hermanos en ese momento.

Indica, que esa tarde, mientras caminaba por una calle del pueblo con su hermana menor; se encontró repentinamente con un gran número de marinos que disparaban al sector donde ellas estaban. El estruendo de los disparos las llenó de terror y se abrazaron instintivamente, pero un brutal golpe en la pierna hizo caer al suelo a la demandante. Detalla, que la bala atravesó su pierna de lado a lado, causándole graves lesiones, que incluye fractura en tallo verde de tibia y fractura total de peroné.

Comenta, que el impacto la obligó a permanecer hospitalizada por más de seis meses, durante los cuales fue trasladada en dos ocasiones a distintos hospitales sin informar a su familia sobre su paradero. Señala, que tras recibir el alta, tuvo que someterse a rehabilitación para mejorar su movilidad, pero las secuelas del disparo le impidieron retomar su vida como antes. No pudo concluir sus estudios de ingeniería en construcción ni participar en deportes como el voleibol, ya que hasta el día de hoy sufre de discapacidades que le impiden pisar con normalidad.

Afirma, que este episodio marcaría su vida de tal manera que volcó todas sus energías a defender los derechos de las víctimas de derechos humanos, transformándose en una reconocida activista, que sostuvo una lucha incansable por visibilizar las violaciones a los derechos humanos y obtener verdad y reparación.

Menciona, que luego de 4 años desde el disparo, Liliana Castillo R. se trasladó a vivir a la ciudad de Iquique, donde se involucró en actividades solidarias junto a otras personas, creando organizaciones para ayudar a quienes lo necesitaban. Expone, que su compromiso con los derechos humanos la llevó a ser detenida en incontables ocasiones por las policías y la CNI.

Hace presente, que en su activismo, viajó a distintas ciudades y fue capaz hasta de encadenarse a edificios públicos para obtener el objetivo de visibilizar el problema, sufriendo golpes, violencia sexual, discriminación de género y política, e intento constante por marginarla del espacio público.



Foja: 1

Expresa, que el 27 de marzo 1985, Liliana Castillo Rogers fue detenida en un allanamiento en su hogar, en la ciudad de Iquique, por un grupo de hombres encapuchados y armados que se identificaron como miembros de la CNI. Durante el allanamiento, su hijo de 9 años, fue agarrado del pelo y arrastrado al interior de la casa, donde fue golpeado e interrogado sobre su madre, a la vez que también presencié los hechos su hija de 11 años. Comenta, que la demandante y su hija lograron escapar, torturando a su hijo menor para que diera información, logrando, instantes después, capturar a la madre y someterla a horas de encapuchamiento, insultos, golpes y amenazas de males contra su familia y de matarla.

Menciona que después de ser identificada en manos de la CNI, gracias a la salvadora intervención de su hija Darling, quien anotó la patente del vehículo y acudió donde un abogado de derechos humanos, lograron que la CNI entregara a Liliana Castillo a Carabineros, quienes la retuvieron por 10 días, y luego a la PDI por otros 5 días; donde permaneció en condiciones infrahumanas permanentemente, comiendo un pan al día, bebiendo escasa agua y con restricciones para el uso del baño, hasta que se informó que sería relegada a un remoto poblado llamado Putú, por un periodo de más de 3 meses, donde subsistió gracias a la solidaridad de los vecinos y pobladores.

Indica, que durante su secuestro, detención y relegación, sus hijos fueron rescatados por familiares, pues habían quedado bajo el amparo de los vecinos en Iquique, por lo que familiares de la demandante fueron a buscarlos a Iquique y los cuidaron hasta que se pudiera encontrar la familia nuevamente.

Detalla, que hay informes de Vicaría de la solidaridad, FASIC, CINTRAS, entre otras publicaciones, que dan cuenta de distintas detenciones y situaciones de represión que debió vivir Liliana. Advierte, que sufrió la violencia policial en la calle, y la expresión máxima de la violencia contra la mujer. Fue una de las mujeres más activas en la lucha de los derechos femeninos, siendo duramente castigada por estos sucesos.

Sostiene, que el disparo sufrido el 13 de septiembre de 1973 por Liliana Castillo Rogers, no solo cambió su vida, sino la de su familia completa. La injusticia sufrida por Liliana nada más iniciarse el periodo del Estado militar, hizo que la familia participara de la protesta y la resistencia popular.

Hace presente, que Liliana estudiaba en la Universidad Federico Santa María al momento de sufrir el disparo, la carrera de ingeniería en construcción, y de haberse titulado podría haber alcanzado un estatus social del más alto nivel.



Foja: 1

Advierte, que sin embargo, el rencor, la angustia, la sensación de injusticia, la violencia y las violaciones a los derechos humanos de manera sistemática por parte del Estado, hicieron que la familia completa pusiera sus energías en la organización social contra el régimen de Pinochet. Esto trajo como consecuencia la presencia de la violencia política constante en su hogar, sufriendo el desmembramiento familiar, por el hecho de tener que vivir de manera clandestina. Su marido sufrió prisión y tortura, y sus hijos fueron víctimas directas de violencia y tortura siendo unos infantes, mostrando lo más horripilante que puede nacer de un grupo humano hacia otro.

Comenta, que a pesar de todas las adversidades, esta mujer nunca cesó en su lucha por la justicia y los derechos humanos. Al año siguiente, se trasladó a Santiago para estar cerca de su esposo, detenido y torturado por la CNI, y aquí se convirtió en una destacada activista, presidiendo la Agrupación Nacional de Familiares de Presos Políticos y cofundando la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Asegura, que durante años, la demandante fue detenida en varias ocasiones y perseguida por su activismo, y su noble causa le valió reconocimientos de personalidades públicas que manifestaron su apoyo expreso en los momentos más difíciles de su vida.

Argumenta que a lo largo de décadas, esta valiente mujer ha enfrentado innumerables obstáculos y sacrificios en su lucha por la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas de la dictadura en Chile. Toda su experiencia durante el periodo de mando de Augusto Pinochet fue para ella una persecución política permanente, sufriendo junto a todos sus familiares el miedo, el terror y la persecución, dejando una huella de dolor en la vida de Liliana María Castillo Rogers, que comenzó el 13 de septiembre de 1973.

Afirma, que los hechos relatados, han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile, a través del Informe emitido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura "Comisión Valech", estableciendo que doña Liliana María Castillo Rogers, se encuentra calificada como víctima de prisión política y tortura por la Comisión Asesora Presidencial de 2010, conocida como Valech II, según consta en el listado de prisioneros políticos y torturados con el número 1.771.

Menciona, que la tortura y privación de libertad por motivos políticos que afectó a miles de personas durante el período 1973-1990, tiene elementos comunes que estuvieron presentes durante el régimen militar, y que permiten afirmar que la



Foja: 1

prisión y tortura tenía motivaciones políticas. Detalla, que en el Informe Sobre Prisión Política y Tortura elaborado por la Comisión Valech, publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, se señala que dichos elementos son los siguientes:

1. La privación de libertad por disposición de organismos político-administrativos, como el Ministerio del Interior, las jefaturas de estado de sitio u otros. Se trata, en efecto, de organismos autorizados a este respecto por normas de excepción constitucional, pero que en la situación en referencia fueron desnaturalizadas, aprovechando que no había elementos de control democrático de los estados de excepción, que los extendían durante períodos muy prolongados y los renovaban en forma continua por la sola decisión del Ejecutivo, sin necesidad de deliberación pública o de una adecuada fundamentación que justificara tales determinaciones.
2. Las detenciones ordenadas por fiscales militares en ausencia de proceso judicial contra el detenido, extralimitando así sus atribuciones.
3. Las detenciones practicadas por organismos de seguridad dependientes del gobierno, como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), u otros servicios creados en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, para realizar la represión política al margen del Derecho, aun cuando algunos de estos fueran consagrados por decretos leyes.
4. Las acusaciones de haber cometido delitos que no constituyen conductas punibles bajo un Estado de Derecho, o no contrarían derechos consagrados por la Constitución y el Derecho Internacional. De hecho, a partir del golpe de Estado se dictaron decretos leyes que tipificaron delitos sancionables, como la pertenencia a partidos políticos o la expresión de determinadas ideas; que penalizaron el ingreso al país de personas expulsadas o con prohibición de ingreso; y que sancionaron el ejercicio de derechos como el de reunión, asociación y libre expresión. Se trató, entonces, de situaciones generalmente comprendidas en la categoría de delitos de conciencia, respecto de los cuales no existe fundamento jurídico para su penalización.
5. Finalmente, también constituyó prisión política aquella privación de libertad ordenada por un tribunal civil o militar, en el marco de un proceso judicial en el que se investigaban delitos tipificados como tales por cualquier ordenamiento jurídico democrático, pero en la que no se respetaron las garantías del debido proceso y la protección frente a torturas, dos derechos violados de modo sistemático.



Foja: 1

Advierte, que cualquiera fuese el período de la represión, esta, por definición, estuvo acompañada de abusos de poder por parte de agentes amparados en su impunidad.

Menciona, que esta Comisión adquirió la convicción moral acerca de la concurrencia de estos elementos determinantes de la prisión política verificada entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 en todos los casos que han sido calificados. Ello permite concluir que durante ese período existió una política de represión organizada por el Estado y dirigida por sus más altas autoridades.

Detalla, que fueron cerca de 1.168 lugares públicos y privados implementados con propósito de perpetrar, en forma sistematizada y en total impunidad, delitos de terrorismo de Estado, persecución política, tortura, secuestro, homicidio, desaparición forzada e inhumación ilegal, entre otros crímenes.

Expone, que en el año 2011, un informe oficial elaborado por la Comisión Valech que investiga los abusos a los derechos humanos en Chile en las décadas de 1970 y 1980, reconoció oficialmente el número total de víctimas entre ejecutados, desaparecidos y torturados durante los 17 años del gobierno de Pinochet, siendo 40.280 las víctimas de la dictadura, entre ellas 3.095 asesinados y desaparecidos. Sin embargo, siguieron pendientes alrededor de mil procesos por violación de derechos humanos. Para elaborar el informe fueron recabados los testimonios de más de 32.000 personas.

Hace presente, que la importancia fundamental del trabajo de estas comisiones es que después de más de 30 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, el Estado chileno otorgó un reconocimiento oficial a las víctimas respecto a la aplicación masiva y sistemática de la tortura por agentes del Estado o personas a su servicio.

Afirma, que los daños señalados por el demandante, con ocasión de los apremios ilegítimos sufridos por éste, son consecuencia directa de los agentes del Estado, estableciéndose el vínculo o nexo causal entre el daño y el agente causante de esto, desnaturalizándose los fines del Estado de aquellos fines éticos y legales del cual surge y está obligado a responder, estableciendo una política del terror sobre sus ciudadanos.

Expresa, que los hechos relatados dan cuenta clara y exacta de la magnitud de los daños físicos, emocionales y materiales que siguen presentes hasta el día de hoy.



Foja: 1

Menciona, que los vejámenes causados a la demandante en los distintos centros de detención, tortura y cautiverio, fueron:

- Víctima de un disparo en su pierna con secuelas físicas permanentes.
- Persecución política contra ella y su familia.
- Allanamientos ilegales reiterados.
- Secuestro.
- Tortura física y psicológica (amenazas) e incomunicación prolongada.
- Simulacro de fusilamiento.
- Golpes de puños y pies.
- Le taparon la vista con una capucha para que no supiera donde estaba o hacia donde se dirigía.
- Privación de alimentos y agua.
- Relegación administrativa en Putú, VIII Región.

Detalla, que la demandante Liliana Castillo Rogers, es una conocida líder social en su comunidad, con una larga experiencia de acción con agrupaciones que buscan la memoria, verdad, justicia y reparación. Afirma, que su dignidad se ha visto herida para siempre desde las vejaciones que tuvo que sufrir tan solo por ejercer el derecho a transitar libremente o el de reunión y de libre expresión. Tuvo que sufrir torturas y crímenes impensados en una sociedad moderna y respetuosa del Estado de Derecho.

Sostiene, que algunas de estas torturas dejaron huellas para toda la vida de la demandante, expresados en forma de traumas crónicos y problemas psicológicos como miedos, pesadillas, crisis de angustias, entre otros.

Sostiene, que el desmembramiento familiar, la frustración de un proyecto de vida, y la alta dignidad que Liliana Castillo R. se ha ganado en el mundo, merecen ser reparados de manera integral de acuerdo al principio de equidad.

Comenta, que el efecto de la represión política traspasa las generaciones (Criterio de la Transversalidad) y que el daño perdura en el tiempo y recrudece con faltas de medidas reparatorias y la permanencia de la impunidad.



Foja: 1

Afirma, que los hechos relatados se enmarcan dentro de aquellos delitos, que la Comunidad Internacional ha denominado Delitos de Lesa Humanidad, según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nuřemberg de 1945, confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas (13/Febrero y 11/ Diciembre de 1946) y refrendado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada en 1998.

Argumenta, que del menoscabo físico y emocional sufrido como consecuencia directa de la detención, prisión, tortura y apremios producidos al demandante, se desprende, inequívocamente, un perjuicio material evidente tanto físico, psicológico, y económico, que hasta el día de hoy deja huellas en él y su familia. Menciona, que especialistas concuerdan que los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes. Añade, que psicológicamente, la tortura significa un golpe tremendo a la personalidad y un desajuste del equilibrio psicológico por el cual las víctimas desarrollan síntomas postraumáticos (TEPT), síntomas depresivos, pensamientos intrusivos y recurrentes, alteraciones de memoria, concentración y somatizaciones.

Expresa, que respecto de los hechos narrados, se ha verificado que el ilícito se produjo por actuaciones del Estado y sus agentes. Los cuales, organizados y amparados en un contexto de impunidad, apoyados con recursos estatales, cometieron actos que califican como delitos de Lesa humanidad; lo que conlleva no solo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- del eventual ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado. Añade, que tratándose de delitos de lesa humanidad, de acuerdo con los Convenios Internacionales de Derechos Humanos suscritos por Chile, estos crímenes son imprescriptibles, estando el Estado obligado a repararlos, haciendo aplicación del Principio de Coherencia, declarando la imprescriptibilidad tanto la acción penal como la acción civil en casos de delitos de lesa humanidad.

Expresa, que la normativa del Derecho internacional, está integrada al ordenamiento jurídico nacional y es vinculante, de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, que consagra además el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia de un acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que como lo ha señalado la jurisprudencia en un fallo del año 2018, ya que en virtud de la dictación de la Ley 19.123 se reconoció de manera explícita la



Foja: 1

innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas, beneficios de carácter económico o pecuniario. Ley que tiene su antecedente en el reconocimiento expreso que hace el Estado de Chile en el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado “Informe Valech”.

Agrega, que la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares, de acuerdo con la normativa convencional de Derechos Humanos, también se ve expresada en el Principio de legalidad que precisa el concepto de Estado de Derecho, estableciendo la sujeción material de los órganos del Estado a la constitución y a las leyes y a las competencias definidas por la ley (artículo 61 y 71 CPE) y la infracción a aquello acarreará las responsabilidades que determine la Ley.

Expone, que la responsabilidad extracontractual del Estado se ha encontrado vinculada a la necesidad de establecer mecanismos de garantía de los ciudadanos frente a la Administración. El Principio de legalidad y de responsabilidad patrimonial de los entes públicos, constituyen la base del Derecho Administrativo, que permiten exigir de la Administración la indemnización por los daños y perjuicios que ocasione la actividad de los poderes públicos en el patrimonio de los ciudadanos.

Comenta, que los crímenes de lesa humanidad que tienen su origen en políticas estatales o de funcionarios públicos, hacen que la responsabilidad por los daños sea atribuible a una responsabilidad por falta de servicio de la administración, que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes, cargas que las víctimas, no se encuentran obligadas a soportarlos. Indica, que el artículo 42 de la Ley 18.575 (BGAE) determina la responsabilidad patrimonial por la función administrativa al exigir la ocurrencia de falta de servicio, entendiéndola la jurisprudencia como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él. Señala, que en la relación de causalidad de la lesión con la actuación (falta de servicio) supone que se ocasione el daño.

Argumenta, que la falta de servicio debe ser entendida con un criterio de objetividad. Advierte que el Derecho de daños ha dado pasos hacia la consideración objetiva de la culpa: basta infringir la norma objetiva de cuidado para incurrir en culpa.

Precisa, que la falta de servicio es un criterio de atribución de responsabilidad que difiere de los propios del derecho Civil, porque su objeto es equilibrar los intereses



Foja: 1

públicos y privados, pero permitiendo que los privados frente a una actuación administrativa deficiente, puedan exigir al Estado ser reparado por los daños inferidos por un funcionamiento anormal o defectuoso del servicio.

En lo relativo a la prescripción, sostiene que reiterada jurisprudencia ha señalado que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito.

Señala, que la obligación de los Estados de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos ha sido consagrada como uno de los principios del derecho internacional público en materia de responsabilidad del Estado. Su carácter vinculante como principio del derecho internacional y, por tanto, aplicable como fuente de obligaciones aún en los Estados que no sean parte de dichos tratados, ha sido establecido por la propia Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Advierte, que el Estado de Chile al suscribir tratados, convenciones, declaraciones y múltiples resoluciones a nivel internacional, se obliga a respetar la costumbre internacional y sus principios generales, va incorporando de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derechos esenciales de la persona” por parte de los Estados. Precisa, que tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.a, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estado Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello se señala, que, en materia de Derecho internacional referida a los derechos humanos, los Estados tienen una obligación denominada de “resultado”, entendiendo por tal, propender a la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Añade, que por la naturaleza del delito, en cuya acción se funda la presente demanda, en que el ilícito de torturas y tratos degradantes e inhumanos, fue



Foja: 1

reconocido por el Estado y se enmarca en los Delitos de lesa humanidad, los cuales, por su naturaleza son imprescriptibles; no resulta posible argumentar que la acción penal es imprescriptible y la acción civil -que deriva del mismo hecho punible- no lo es. Destaca, que la responsabilidad del Estado chileno emana de una norma de rango constitucional, la cual ha posibilitado la incorporación en el ordenamiento jurídico nacional de las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del derecho humanitario, en los cuales se instaure el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia de los apremios ilegítimos sufridos por la demandante.

Indica, que frente a la lesión de un interés jurídicamente relevante, se puede llegar a la compensación del daño no patrimonial y no solo por el dolor o sufrimiento que se padece. Añade, que hoy el daño extrapatrimonial protege más allá del pretium doloris que es solo una especie del mismo. Así, si la víctima ha sufrido un daño corporal o un daño a la dignidad humana, a la libertad o a otros derechos de la personalidad, debe ser indemnizada por daño moral. Comenta, que se resarce el daño no patrimonial incluso de aquellas personas allegadas a la víctima de un accidente mortal o una lesión muy grave.

Expresa que no debe entenderse que las prestaciones establecidas en la ley 19.123 pugnan con la pretensión indemnizatoria presentada, ya que estas leyes fueron creadas de forma general, sin que pueda presumirse que el Estado ha pretendido con ellas una reparación íntegra del daño causado. Agrega, que de acuerdo a la historia fidedigna de la ley, estas medidas tienen solamente una naturaleza asistencial más no reparatoria. Precisa que:

1. La Ley 19.123 no considera incompatible esta pensión asistencial con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, como expresamente lo ha señalado en su artículo 24° *“la pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al beneficiario”*.

2. Tanto la Ley 19.992 como 19.123, surgen del reconocimiento de la responsabilidad que le cabe al Estado, por el daño causado por sus agentes durante el período de represión política.

3. Nuestros Tribunales, han señalado reiteradamente su carácter asistencial.



Foja: 1

4. Aceptar que estos montos tienen el carácter de reparación no se condice con el Derecho Convencional de Derechos Humanos, al estar fijados de manera general, sin ninguna consideración a cada caso en particular, y por montos que a todas luces son insuficientes.

Argumenta, que la existencia de estos beneficios no obsta de ninguna forma a que las víctimas puedan instar, mediante la correspondiente acción de responsabilidad, a la reparación efectiva de todo daño sufrido.

Destaca, que en materia de derechos humanos debe primar un criterio diverso al utilizado por el derecho iusprivatista y que ha sido también recogido por el derecho internacional público, esto es, no mirar la responsabilidad desde el sujeto dañador. En materia de derechos humanos, y en particular en lo que dice relación con las reparaciones, es fundamental mirar el tema desde la óptica de la víctima. Esto supone determinar cómo se puede restituir a la persona afectada en sus derechos fundamentales, cómo puede el derecho restablecer la situación, no sólo patrimonialmente, sino que integralmente, mirando a la persona como un todo. La normativa a aplicar en esta materia deriva de las normas del Derecho Convencional, que tiene características de norma especial de mayor especificidad referente a los delitos de lesa humanidad.

Respecto de la forma en que el Estado debe reparar los daños inmateriales, detalla, que la Corte ha señalado un concepto amplio de reparación, que considera tanto compensaciones pecuniarias como otro tipo de medidas. En el mismo sentido, destacan en la jurisprudencia, aquellas sentencias donde se ha puesto énfasis en la afectación de aspectos subjetivos de apreciación personal, producto de la violación de derechos sufrida por la víctima.

Indica, que al momento de establecer un monto de indemnización, se deberá efectuar una cuantificación monetaria de los daños sufridos por el demandante.

Hace presente, que en la actualidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. De hecho, en las sentencias dictadas por esta Corte se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos, tales como, las afectaciones a su derecho a la vida, o a la integridad personal o la libertad ambulatoria, no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido, toda vez que (dicho padecimiento) resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a



Foja: 1

tortura, agresiones y vejámenes (...) experimente dolores corporales y un profundo sufrimiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicita que se falle ordenando indemnizar el daño causado por delitos de lesa humanidad y se condene al Fisco de Chile al pago de \$400.000.000, a título de indemnización por el daño extrapatrimonial, tanto material indirecto como inmaterial que se le ha causado como consecuencia directa de las terribles consecuencias provocados en su detención ilegal o secuestro, cautiverio, torturas, golpes, amenazas de muerte, lesiones graves, relegación, violencia contra su familia y persecución política, a partir del 13 de septiembre de 1973, y hasta el término de la dictadura, o bien, lo que esta judicatura determine prudencialmente, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de la demanda y el pago efectivo de la indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo periodo, y las costas de la causa.

Previa invocación de disposiciones legales que estima pertinentes, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, por la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos) en favor de doña Liliana María Castillo Rogers, o bien, en su defecto, a la suma que este tribunal considere en justicia según los parámetros del derecho internacional y la legislación nacional pertinente, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa.

SEGUNDO: Que, en su contestación, respecto de las excepciones, defensas y alegaciones que se contraponen a la demanda, opone en primer lugar, la Excepción de Reparación Integral, por haber sido ya indemnizada la demandante.

Señala, que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. Expresa, que dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior –y desde– lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”. Comenta, que el denominado dilema “justicia versus paz” es uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Advierte, que argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así



Foja: 1

pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Indica, que no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Indica, que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la Ley 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Prosigue relatando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron *“(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”*.

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al



Foja: 1

proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, *“reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”*.

Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la Comisión, entendió por reparación *“un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”*. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en *“un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y al consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”*. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Relata, que en la discusión de la ley 19.123, el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas se encontraba también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual” del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Expresa, que asumida esta idea reparatoria, la Ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas, han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En este sentido, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones:

a. Reparaciones mediante transferencias directas de dinero.



Foja: 1

b. Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas.

c. Reparaciones simbólicas.

Asegura, que mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de Justicia Transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Continúa su explicación, señalando que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Detalla, que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech).

b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992.

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.

En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, indica que una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que se valore para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar, lo cual da como resultado un impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones bastante alto.



Foja: 1

En lo tocante al caso que nos ocupa, señala que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N°s 19.234 y 19.992 y sus modificaciones.

Comenta, que la ley 19.992 y sus modificaciones, establecieron una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Afirma, que el demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

Refiere a continuación, que la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.

En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad, cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios. A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2020, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883.



Foja: 1

Añade, que se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores.

Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Adicionalmente, refiere que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor - siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Argumenta, que la doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Detalla, que en esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como la construcción de memoriales, un museo de la memoria y los Derechos Humanos, la conmemoración del “Día Nacional del Detenido Desaparecido” y el establecimiento del Premio Nacional de los Derechos humanos,

Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

Insiste, que de todo lo expresado, puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, y han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DD.HH.

Asegura, que tanto las indemnizaciones demandadas como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no procediendo por ello, ser compensados nuevamente.



Foja: 1

En este punto el fallo “Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, de 2002, Rol 4753-2001, ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues *“aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”*.

En el documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law Tools for Post-conflicts States) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.

Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. De este modo, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados.

Añade que en la misma línea, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización, lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.



Foja: 1

Concluye señalando, que en atención a que las acciones interpuestas en autos están basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante de la presente causa.

En segundo lugar, deduce la excepción de prescripción extintiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas éstas, se rechace la demanda, en todas sus partes.

Comenta, que entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil.

En subsidio de lo anterior y en caso de que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil, transcurrió el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Argumenta que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles: *“Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”*.

Afirma, que por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que *“para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial*



Foja: 1

sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”.

Sobre esta materia cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Efectivamente, las normas del Título XLII Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.*

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2°, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

La prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1°, del Código Civil).

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Añade, que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Destaca, que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.



Foja: 1

Sostiene, que la prescripción no es como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

Hace presente, que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Señala, que por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

Advierte, que es de público conocimiento, que la Excelentísima. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, dictó con fecha 21 de enero de 2013, sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

En dicha sentencia, el Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva.

2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare



Foja: 1

imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal.

3°) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto.

4°) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Añade además, que las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por su parte, lo que solicita se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis.

Prosigue señalando, que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Comenta, que sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento



Foja: 1

plausible para estimar que se trata de una acción ajena a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Finalmente, en relación con las alegaciones expuestas por la actora en cuanto que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, señala que se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Señala que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar-tal como lo ha reconocido la Excelentísima Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la Imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Detalla, que los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

La Resolución N°3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “*Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad*”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

En relación a esta Convención debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una



Foja: 1

reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile.

Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Afirma que este planteamiento, ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país.

Insiste que, no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Con el mérito de lo expuesto, insiste que deberá rechazarse la demanda indemnizatoria por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procede a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada.

Con relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que se aporten en la etapa probatoria.



Foja: 1

Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Detalla, que en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Señala, que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, las cifras pretendidas por los demandantes como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Afirma, que la especial naturaleza que informa al daño moral que se alega, no exime a la parte de su carga de probar su efectiva concurrencia y de una valoración racional y prudente del juez. Expresa, que sin desconocer los graves



Foja: 1

hechos de violación a los Derechos Humanos ocurridos en dictadura y en los cuales se funda el daño que se reclama, advierte, que ello no significa que se tenga por acreditada su efectiva ocurrencia en cada caso por el sólo hecho de ser mencionado en la demanda. Afirma, que se impone a este respecto, observar la necesaria distinción entre la presunción como herramienta jurídica normativa y aquella que se emplea como medio de convicción judicial, pues si bien es perfectamente factible que el fallador arribe a la conclusión que, efectivamente, se verificó una afectación moral indemnizable a partir de una multiplicidad de hechos graves, ciertos y conocidos, (demostrables al menos indirectamente), ello no exime a la parte demandante de probar su daño, ya que no existe norma alguna que permita presumir la concurrencia del daño moral ni mucho menos a invertir el peso de la prueba en la materia.

Comenta, que tal como ha señalado nuestra jurisprudencia en esta materia, existe el imperativo de analizar en detalle los antecedentes en que se fundan los perjuicios que la detención, tortura y apremios ilegítimos provocaron a la parte en el caso particular.

En subsidio de las alegaciones precedentes, refiere que en la fijación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos a través de los años por el actor de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, advirtiendo que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Por último, hace presente también, que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en autos acoja las demandas y establezca esa obligación y además, desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Indica que a la fecha de interposición de la demanda o de su notificación y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene el demandado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.



Foja: 1

Advierte que lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Explica, que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, resulta improcedente pretender aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, expone que el artículo 1.551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, en el hipotético caso de que se acojan las referidas acciones y se condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrían devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su parte incurra en mora.

Previa invocación de disposiciones legales y jurisprudencia que estima pertinente, solicita tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

TERCERO: Que, el demandante evacuó la réplica reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda.

Hace presente, que el Fisco de Chile no discutió ninguno de los hechos relatados en la demanda.

En cuanto a la excepción de reparación integral, expresa, que la Ley N° 19.992 (Ley Valech) en su artículo 1, señala que otorga una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. En el artículo 2, inciso segundo, señala expresamente que esta pensión es incompatible con las pensiones por exoneración política, otorgadas por las leyes N°19.234, 19.582 y 19.881. Lo cual significa, que respecto a aquellas víctimas de terrorismo de Estado, que teniendo las dos calidades, al haber sufrido tortura y prisión política



Foja: 1

por un lado y ser exonerado político por otro, y no obstante haber sido reconocido por el Estado por ambas calidades, éste le priva de los derechos que cada calidad les da y los hace optar por una o por otra en cuanto a la pensión solicitada y sus beneficios y cómo indemnización le otorga por una única vez un monto de tres millones de pesos, que está muy lejos de lo que en derecho debieran percibir por ambas calidades, que además de no ser excluyentes son de diferente naturaleza.

Respecto a la compatibilidad de estos beneficios con las pensiones del Sistema del Pilar Solidario, argumenta, que estos se deben revisar a la luz de las normas sobre la materia establecidas en las leyes N° 20.255 y 19.992. Detalla, que el artículo 36 de la Ley N° 20.255 señala que los beneficiarios de pensiones por gracia, exoneradas políticos, y beneficiarios por la Ley Rettig y la Ley Valech podrán acceder a los beneficios del Sistema Solidario siempre que cumplan los requisitos establecidos en él, que dicen relación a edad, focalización y años de residencia. Pero luego en el inciso segundo del mismo artículo se establecen las siguientes reglas: los pensionados por gracia, exonerados políticos, Ley Rettig y Ley Valech tendrán acceso a un porcentaje de la Pensión Básica Subsidiaria (PBS) de vejez o invalidez si esta última fuere de un monto superior al de la primera. El monto de la PBS de vejez o invalidez a la que tendrán acceso ascenderá al valor que resulte de restar de la referida pensión básica la o las pensiones que perciba el pensionado. Los pensionados por gracia, exonerados políticos, Ley Rettig y Ley Valech, podrán tendrán acceso al Aporte Previsional Solidario de vejez (APS), pero el monto de dicho Aporte se calcula deduciendo del monto calculado como APS el monto de la pensión que perciban por reparación.

Comenta, que el monto percibido como pensión de reparación por la Ley Valech se descuenta de lo que le correspondería por concepto de PBS o APS, lo que significa en términos muy claros y simples que aquellas pensiones de reparación han terminado siendo, como reiteradamente lo han señalado los Tribunales de Justicia, *“puramente asistencial, destinada solo a establecer condiciones de sobrevivencia y no indemnizatorias”*; privándole a las víctimas de su legítimo derecho a solicitar las pensiones del Sistema Solidario de Pensiones, a las cuales tienen derecho, realizando el Estado una discriminación arbitraria e ilegal.

Menciona, que cómo han señalado muchas víctimas, *“el Estado no sólo nos infringió tortura y prisión política, sino que además actualmente nos sigue dañando, nos priva de nuestros derechos como ciudadanos”*.

Añade, que quienes tienen alguna de las pensiones de reparación, además están impedidos de poder postular a cualquiera de los beneficios que se otorgan a la



Foja: 1

población más desprotegida y frágil, llámese bonos de invierno, bonos de luz, gas u otros. Advierte, que esta es la realidad que, no señala la contraria, al enumerar los innumerables beneficios otorgados por el Estado a las víctimas y que eufemísticamente las llama como “transferencias directas de dinero” y que termina siendo, una pensión asistencial al que cualquier ciudadano cumpliendo los requisitos podría acceder y en mejores condiciones. Expresa, que por ello los montos expresados en cifras, que señala la demandada, como pensiones de reparación a diciembre de 2019 en el escrito de contestación, son engañosos, porque ese monto correspondería -si no hubiese mediado tortura y prisión política- a pensiones del Fondo Solidario que el Estado otorga a toda la población, que en este caso, llama de reparación porque se lo otorga a víctimas de violencia estatal.

Respecto al segundo tipo de compensación, denominada asignaciones de derechos sobre prestaciones estatales específicas, hace mención al Programa PRAIS, el cual es un programa de gratuidad en las prestaciones médicas, señalándolo como equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva; afirma, que es aparente, ya que las prestaciones otorgadas por PRAIS, son deficientes y se apoyan y funcionan al alero del sistema público de salud.

Destaca, que los beneficios educacionales señalados a hijos y nietos, no existen si la víctima ha hecho uso de ese derecho, siendo inentendible esta exclusión al día de hoy, cuando hay consenso en que los daños que ocasionan la tortura y prisión política, desaparecimiento forzado de las víctimas, respecto de sus familiares, son transgeneracionales.

El tercer tipo de reparación que señala la contraria, son las reparaciones simbólicas, enumerando una serie de construcciones, de memoriales para “el recuerdo a la infracciones a los DDHH”. Sin embargo, sostiene, que el gasto público que significó para el Estado haber implementado toda esta maquinaria del terror para ejercer “terrorismo de Estado” sobre una parte de sus conciudadanos, debe superar infinitamente los montos señalados como “gastos del Estado en Reparación”. Opina, que infraestructura, logística, sueldos, no se condice con “monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc”.

Comenta, que lo invocado por el Fisco, a objeto de oponer “excepción de pago”, “reparación satisfactiva o integral” y “la improcedencia de solicitar indemnización basado en la identidad de causa entre lo que se pide y las reparaciones realizadas”, resulta insostenible frente a los hechos expuestos y al derecho latamente señalado en el escrito de la demanda presentada. Respecto al argumento de que el demandado habría indemnizado al amparo de los beneficios



Foja: 1

de las leyes N° 19.123, Ley N°19.234 y Ley N° 19.992, precisa, que no debe entenderse que las prestaciones establecidas en estas leyes pugnan con la pretensión indemnizatoria presentada, ya que es la misma Corte que ha señalado en reiteradas ocasiones, que estas leyes fueron creadas de forma general, sin que pueda presumirse que el Estado ha pretendido con ellas una reparación íntegra del daño causado. Agrega, que de acuerdo a la historia fidedigna de la ley, estas medidas tienen solamente una naturaleza asistencial más no reparatoria, y en este sentido señala:

1. La Ley 19.123 no considera incompatible esta pensión asistencial con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, como expresamente lo ha señalado en su artículo 24° *“la pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al beneficiario”*.

2. Tanto la Ley 19.992 como 19.123, surgen del reconocimiento de la responsabilidad que le cabe al Estado, por el daño causado por sus agentes durante el período de represión política (como consta en la historia fidedigna de la Ley).

3. Nuestros Tribunales, han señalado reiteradamente su carácter asistencial, así la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señala *“finalmente la alegación de no proceder la indemnización reclamada por haberse otorgado la establecida en la Ley No 19.123 debe ser rechazada, por cuanto es palmario que la dispuesto en tal cuerpo legal no obstante sus motivaciones y texto, es puramente asistencial, destinada solo a establecer condiciones de sobrevivencia y no indemnizatorias”* (CFR. Corte de Apelaciones, Caso Montes con Fisco de Chile, 10-07- 2007).

Expresa, que aceptar que estos montos tienen el carácter de reparación no se condice con el Derecho Convencional de Derechos Humanos, al estar fijados de manera general, sin ninguna consideración a cada caso en particular, y por montos que a todas luces son insuficientes.

Advierte, que la sentencia “Domic Bezic, Maja y otros con Fisco” del año 2002, que hace el Estado de Chile en sus alegaciones, ha sido doctrinariamente superada hace ya bastante tiempo.

Hace presente, que las acciones indemnizatorias ejercidas por el demandante, tienen como antecedentes la perpetración de crímenes de lesa humanidad, en que



Foja: 1

se persigue la responsabilidad del Estado por actuaciones de sus agentes los cuales han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos. Sostiene, que el derecho internacional citado, en concordancia con el derecho interno sobre responsabilidad extracontractual, imponen al Estado la obligación de un resarcimiento integral del daño causado, el que no se satisface con las reparaciones generales, aludida por la demandada, ni menos impiden a la víctima recurrir a los tribunales de Justicia.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva, asegura, que la demandante yerra en normativa al caso a aplicar, ya que estas están contenidas en el ordenamiento constitucional, en las normas convencionales de derecho internacional y en el ordenamiento administrativo.

Afirma, que la acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, establecida en el artículo 38 inciso 2°, reconoce el Principio de responsabilidad de Estado, pero no establece plazo de prescripción.

Sostiene, que la Ley 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones.

Advierte, que resulta contrario a derecho tratar de aplicar normas de derecho privado a delitos de lesa humanidad, porque, el Estado chileno, ha incorporado a nuestra legislación los Tratados y principios que rigen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a través del artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política del Estado, constituyéndose así, en norma nacional, vinculante y especial. Comenta, que pretender aplicar las normas del derecho común a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad, y plantearlo como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta improcedente.

Expone, que la obligación de los Estados de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos ha sido consagrada como uno de los principios del derecho internacional público en materia de responsabilidad del Estado. Su carácter vinculante como principio del derecho internacional y, por tanto, aplicable como fuente de obligaciones aun en los Estados que no sean parte de dichos tratados, ha sido establecido por la propia Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Foja: 1

Asegura, que por la naturaleza del delito, en cuya acción se funda la demanda de autos, en que el ilícito de torturas y tratos degradantes e inhumanos, fue reconocido por el Estado y se enmarca en los Delitos de lesa humanidad, los cuales, por su naturaleza son imprescriptibles, no resulta posible argumentar que la acción penal es imprescriptible y la acción civil -que deriva del mismo hecho punible- no lo es. La responsabilidad del Estado chileno emana de una norma de rango constitucional, la cual ha posibilitado la incorporación en el ordenamiento jurídico nacional de las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del derecho humanitario, en los cuales se instaura el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia de los apremios ilegítimos sufridos por el demandante.

En cuanto al contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, argumenta, que la acción indemnizatoria que emana de delitos de Lesa Humanidad, no puede ser abordada como mera acción patrimonial, sino como acción reparatoria.

Con respecto a las alegaciones de fijación de la indemnización por daño moral, señala, que en virtud de los antecedentes expuestos, en orden a resolver una indemnización completa e íntegra del perjuicio ocasionado se ha establecido la suma de \$400.000.000 como pretensión completa a la indemnización de daño material e inmaterial y que en subsidio se ha señalado “o bien lo que esta judicatura determine en justicia”. En cuanto a que se deben considerar los pagos ya recibidos por el Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, da por reproducidas las alegaciones señaladas referente a las transferencias directas de dinero, que deja en evidencia que las pensiones otorgadas en calidad de “reparación”, no han sido tales, ya que en los hechos sustituyen las pensiones asistenciales, que de no mediar el ilícito, podrían acceder a ellas, inclusive con mayores beneficios.

Respecto a los montos indemnizatorios, señala que en casos emblemáticos como de Orlando Letelier, Carmelo Soria, Caravana Copiapó, que en este último caso se fijó para cada una de las víctimas una indemnización de \$150.000.000 millones de pesos.

En cuanto a la improcedencia del pago de reajustes e intereses. Indica, que esta solicitud atiende a la extensión en el tiempo que puede tener el juicio, que incide en que el monto establecido por el Tribunal sufra pérdida en su valor adquisitivo. No obstante aquello, hace presente, que serán los tribunales quienes determinarán cuándo se reajustarán y devengarán intereses los montos fijados.



Foja: 1

Además, solicita que se condene expresamente en costas a la parte demandada, no solo en virtud de que la demanda sea acogida en todas sus partes, sino que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2° letra d) de la Ley 20.886.

Añade, que mediante la interposición de una excepción extintiva de prescripción por parte del demandado, se configura la contradicción de sus actos propios, al estar solicitando la aplicación de herramientas jurídicas que están en clara pugna con lo declarado y reconocido por el Estado chileno ante la CIDH. Afirma, que al estar en presencia de esta contradicción, el Tribunal se encuentra en el deber de sancionar al demandado, por la facultad que le entrega el art. 2° letra d) de la Ley 20.886, citada más arriba, siendo la condena en costas, la manera más adecuada para sancionar la conducta contraria a la buena fe, en que incurre el demandado.

Previa invocación de disposiciones legales que estima pertinentes, solicita tener por evacuada la réplica y dar curso progresivo a los autos, confiriendo traslado para la dúplica.

CUARTO: Que, el demandado evacuó la dúplica, ratificando, en primer lugar, la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda de autos, y con su mérito solicitó el rechazo de la demanda.

En cuanto a la excepción de reparación integral, reitera que el daño moral ya ha sido indemnizado, por lo que procede se haga lugar a la excepción alegada. Insiste que el Estado de Chile ha realizado esfuerzos para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, respecto a las reparaciones percibidas por el demandante, ya sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación.

En relación con la prescripción de las acciones deducidas en este juicio, se reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”. Detalla, que en dicho fallo se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

Afirma, que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. Expresa, que la aplicación de esta norma



Foja: 1

está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “*a favor y en contra del Estado*”.

Añade, que también la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. Comenta, que en el fallo dictado por el Pleno de la Excma. Corte queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia.

En cuanto a las alegaciones vertidas por el demandante relativas al monto demandado y los reajustes e intereses, da por reproducidos en forma expresa las alegaciones vertidas en la contestación de la demanda.

Previa invocación de jurisprudencia que estima pertinente, solicita tener por evacuado el trámite de la dúplica.

QUINTO: Que, para acreditar sus dichos, la demandante acompañó al anexo de folio 1 y 33, los siguientes documentos:

1.- Certificado de nacimiento de la demandante Liliana María Castillo Rogers, C.I. 5.778.054-1.

2.- Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de fecha 11 de marzo de 2024.

3.- Copia autorizada de antecedentes de doña Guisela Adriana Sanchez Mancilla, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentados ante la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctima de Prisión Política y Tortura Valech II.

4.- Informe Psicológico de daños asociados a la violencia política, elaborado por la Psicóloga doña María Angélica Correa Cabrera, C.I.: 6.699.010-9, perteneciente a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), relativo al caso de doña Guisela Adriana Sánchez Mancilla.

5.- Informe elaborado por el equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad, titulado “Salud Mental y Violación a los Derechos Humanos”. Junio de 1989.



Foja: 1

|6.- Informe privado de carácter científico, emitido por profesionales de la Vicaría de la Solidaridad, titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico”.

7.- Documento de carácter científico titulado: “Tortura, proceso salud-enfermedad y psiquiatría”, elaborado por el Psiquiatra Carlos Madariaga.

Además, al folio 41, el Tribunal ordenó medida para mejor resolver, teniéndose por agregados los documentos acompañados al anexo de folio 37, individualizados como:

1.- Certificado de víctima de la demandante Liliana María Castillo Rogers, C.I.: 5.778.054-1, emitido con fecha 5 de diciembre de 2023, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que certifica que la demandante se encuentra en el listado de víctimas de la Comisión Valech II.

2.- Carpeta de antecedentes entregados a la Comisión Valech II, denominados “carpeta Valech”, correspondientes a la demandante Liliana María Castillo Rogers, que sirvieron para su calificación como víctima de prisión política y torturas, antecedentes entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su calidad de custodio y garante de dichos antecedentes.

3.- Informe de daños asociados a la violencia política, de fecha 31 de noviembre de 2023, relativo al caso de la demandante doña Liliana María Castillo Rogers, C.I.: 5.778.054-1, realizado por la psicóloga María Angélica Correa Cabrera, C.I.: 6.699.010-9.

SEXTO: Que, por su parte, la demandada solicitó oficio al Instituto de Previsión Social (IPS) a fin de que informe sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido la parte demandante, especialmente en relación a las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874, y demás pertinentes; el cual fue respondido a folios 31.

SÉPTIMO: Que, el caso de autos, versa sobre la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por el disparo recibido, múltiples detenciones, y tortura sufrida por la demandante, ocurrida a partir del 13 de septiembre de 1973; por lo que resulta necesario determinar la existencia de dicha responsabilidad.

OCTAVO: Que, en atención a los documentos agregados mediante la medida para mejor resolver decretada al folio 41, especialmente el certificado de víctima de la demandante, emitido con fecha 5 de diciembre de 2023, por el Instituto



Foja: 1

Nacional de Derechos Humanos, que certifica que la demandante se encuentra en el listado de víctimas de la Comisión Valech II; y la carpeta de antecedentes entregados a la Comisión Valech II, denominados “carpeta valech”, correspondientes a la demandante Liliana María Castillo Rogers, que sirvieron para su calificación como víctima de prisión política y torturas; junto con el oficio de folio 31; acreditan que la demandante, está calificada como víctima de Prisión Política y Tortura de la Comisión Valech II.

Cabe destacar, que la parte demandada no ha controvertido estas circunstancias, sino que ha centrado la controversia en primer lugar, en si el demandante ya ha sido reparado en los perjuicios alegados o si la indemnización pretendida resulta incompatible con las reparaciones concedidas por las leyes 19.123 y 19.992, con sus modificaciones y otras normas pertinentes; y en segundo lugar, si la acción indemnizatoria deducida por el actor, se encuentra prescrita extintivamente a la fecha de haber sido notificada al demandado.

NOVENO: Que, de los párrafos reseñados en el considerando anterior, podemos concluir como hechos no controvertidos en autos: a) la calidad de víctima de detención ilegal y tortura de doña Liliana María Castillo Rogers; y, b) que en la calidad antes señalada, aparece en el Informe emitido por la Comisión Valech II.

En consecuencia, se tendrá presente que la responsabilidad del Estado no ha sido discutida por las partes de este juicio, es más, la demandada alega expresamente que el actor, ha sido reparado satisfactoriamente por el Estado por los delitos cometidos en su contra durante la época de la dictadura.

Además, se tendrá por acreditado que la detención ilegal y tortura del demandante, ocurrió en un contexto de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado o civiles que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, mediante prácticas graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos con el único objetivo de exterminar y amedrentar -ya sea física y/o psicológicamente- a personas opositoras al régimen militar, como en el caso de marras.

Así lo expuesto, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto a que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y en su inciso final, al señalar que la infracción de



Foja: 1

esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por las Leyes N° 19.992 y 20.784 al demandante.

En cuanto a la excepción de prescripción.

DÉCIMO: Que, en primer lugar y respecto a las alegaciones efectuadas por la parte demandada en cuanto a que la acción civil se encontraría prescrita, ya sea por la fecha en que ocurrieron los hechos, o por la fecha de retorno a la democracia, por lo que han transcurrido los plazos para ejercer la acción civil, se deben tener presente una serie de elementos facticos y jurídicos.

En primer lugar, y como ya se ha señalado reiteradamente en esta sentencia, nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establecen los respectivos convenios e instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, toda vez que estos hechos ocurrieron en un contexto de excepción, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o con simples fines de amedrentamiento de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

Considerando la conclusión del párrafo precedente, corresponde determinar si estos son prescriptibles o no, teniendo presente que partiremos enfocándonos en la acción penal. Así, uno de los elementos más característicos de los crímenes de lesa humanidad es justamente su imprescriptibilidad, pues así se establece, por ejemplo, en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de fecha 26 de noviembre de 1968, específicamente en su artículo I letra b), el que señala que *“Los crímenes siguientes son imprescriptibles, (...) b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz...”* y en el artículo 3° del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda de 1994. Si bien la Convención no se encuentra ratificada por nuestro país, las normas y



Foja: 1

especialmente los principios contenidos en el instrumento internacional, sin lugar a dudas se elevan a la categoría de ius cogens, la que sí tiene plena aplicación en nuestro derecho interno. Así también lo ha establecido la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema en fallos recientes, como son en causa Rol N° 1424-2013, denominado “Episodio Tejas Verdes” de fecha uno de abril de 2014, en sus considerandos sexto al décimo quinto; la causa Rol N° 4300-2014, denominado “Episodio Nilda Peña Solari” de fecha cuatro de septiembre de 2014, en sus considerandos octavo al décimo tercero; y la causa Rol N° 21.177-2014, denominado “Episodio Villa Grimaldi”, caratulados “Ramón Martínez González”, de fecha diez de noviembre de 2014, en sus considerandos décimo cuarto al décimo octavo, solo por citar algunos.

En consecuencia, habiéndose determinado que la acción penal en materia de crímenes de lesa humanidad resulta imprescriptible, es necesario establecer si en el caso de marras la acción civil que deriva de estos hechos punibles también resulta imprescriptibles o si por el contrario debe aplicarse las reglas generales de prescripción del Código Civil.

Es así, que teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que la presente acción indemnizatoria, si esté sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito. Así lo ha resuelto la Corte Suprema, en reiterados fallos, como por ejemplo en la sentencia de reemplazo en causa Rol. N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, denominado “Episodio Nilda Peña Solari” (considerando Segundo), de igual forma en causa Rol. N° 1424-2013, de fecha uno de abril de 2014, denominado como “Episodio Tejas Verdes” (considerando Undécimo, segundo párrafo), en la cual se establece claramente que la acción civil es imprescriptible. A mayor abundamiento señala el citado fallo:

“... Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatorio



Foja: 1

y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama...”

Misma conclusión ha llegado la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo en sentencia causa Rol. N° 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014 (considerando Décimo Cuarto), la que señala en lo relativo a la acción civil que al igual que la acción penal, ésta

“... es imprescriptible porque se sustenta en una conducta ilícita de agentes del Estado... calificándose el delito de lesa humanidad”.

Debe tenerse presente además, que no estamos frente a una acción de indemnización de perjuicios común, que derive de relaciones privadas contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el ius cogens, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, por cuanto ha ratificado la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

Señala también la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, que dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la carta política, sin que sea posible estimar, como pretende la demandada, que dicha



Foja: 1

instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, aserto que importaría desdeñar preceptos constitucionales.

Es así, que los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, si bien también se aplican a favor del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, no resultan aplicables en esta materia, por ser abiertamente contrarias a las normas internacionales de Derechos Humanos ya mencionadas, que establecen un carácter unitario de las acciones penales y civiles emanados de delitos de lesa humanidad.

Así las cosas, esta sentenciadora y teniendo presente las normas ya referidas y por los fundamentos antes expuestos, rechazará tanto la alegación principal como la subsidiaria en cuanto a declarar cualquiera de las prescripciones de la acción civil que da origen a estos autos, declarando expresamente para los efectos de la presente sentencia, que la acción civil emanada de una acción penal de tipo imprescriptible por crímenes de lesa humanidad, también es imprescriptible.

En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva o de pago.

UNDÉCIMO: Que, la parte demandada opuso también la excepción de ser improcedente la indemnización por la existencia de reparación satisfactiva obtenida por el demandante.

Al respecto, cabe tener presente que la Ley N°19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios, a través de los cuales el Estado chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo 4° de la citada ley dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.



Foja: 1

Asimismo, la citada ley en parte alguna estableció una incompatibilidad entre los beneficios que otorga e indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, no existiendo motivo alguno ni siendo facultad de esta sentenciadora para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.123 y N° 19.992 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral.

Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema en diversos fallos, indicando incluso que las fuentes que dan origen a la indemnización por daño moral y los beneficios establecidos por la Ley N° 19.123 provienen de fuentes distintas. Es así, que la indemnización encuentra su fuente en el derecho internacional por la demanda que se hace al Estado en la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos así como la interpretación de las disposiciones de derecho internacional que conforman el ius cogens que tiene plena aplicación en virtud del artículo 5° de la Constitución Política del Estado, a diferencia de la norma legal interna citada. Indica que el espíritu de la Ley N° 19.123 al establecer beneficios relacionados con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no pueden confundirse con aquellas que emanan del Derecho Internacional que imponen la obligación de reparación íntegra. Refiere que la citada ley no establece la incompatibilidad reclamada por el Fisco, como tampoco importa una renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia. Por último, agrega que los beneficios establecidos en el cuerpo legal no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral sufrido por las víctimas (Sentencia Corte Suprema, Rol N° 1424-2013, “Episodio Tejas Verdes”, considerando décimo tercero).

DUODÉCIMO: Que, a fin de zanjar la discusión anterior, el hecho que el demandante sea beneficiario de un sistema de previsión de salud especial, de gestos simbólicos u otras medidas análogas, no es en caso alguno incompatible con la obtención de indemnizaciones pecuniarias por los graves hechos cometidos de los cuales han sido víctimas directa o indirectamente.



Foja: 1

Cabe hacer presente además, y como es de público conocimiento, que muchos de los “gestos simbólicos” como señala la demandada en su escrito de contestación han sido realizados, organizados y financiados por particulares y organizaciones no gubernamentales, en los cuales el Estado ha participado de manera tangencial o derechamente no lo ha hecho.

Es por lo anteriormente expuesto que se rechazara la excepción alegada de reparación satisfactiva, ya obtenidas por el demandante.

En cuanto al fondo.

DÉCIMO TERCERO: Que, entrando al fondo de la acción deducida, y teniendo establecida la responsabilidad civil el Estado, según se explicó en los considerandos octavo y noveno de esta sentencia, habiéndose además declarado la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la Ley N°19.123 y N°19.992 y las reparaciones simbólicas, según el considerando undécimo, y declarada la imprescriptibilidad de la acción de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el considerando décimo, corresponde analizar la procedencia de indemnizar al actor, por el daño moral con ocasión de su detención y torturas, cometida por agentes del Estado, y en la afirmativa, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose de paso a las excepciones relativas al monto y naturaleza de la indemnización e improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por los actores, opuesta por el demandado.

Debe tenerse presente que el daño moral, es definido como el detrimento, angustia, dolor sufrimiento, aflicción o menoscabo o trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo, no definible por parámetros objetivos, que puede afectar a la víctima o a un tercero, pudiendo consistir en daño moral puro o bien de índole pecuniario cuando indirectamente afecta la capacidad productiva del perjudicado. Así también, en reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

DÉCIMO CUARTO: Que, lo descrito por el demandante en su libelo, en concordancia con que dichas circunstancias no fueron objetadas ni desacreditadas



Foja: 1

por la demandada, y el hecho que la demandante se encuentra incorporada como víctima de prisión y torturas por la Comisión Valech II, habiéndose efectuado por este organismo un proceso investigativo y formado convicción de la calidad de víctimas de las personas incorporadas en dicho listado, ya bastan para tener por acreditado el daño moral sufrido por el demandante, presumiéndose con claridad las circunstancias de su detención, la aplicación de reiteradas y terribles torturas, que le causaron un gravísimo pesar y dolor, los que razonablemente se profundizaron y profundizan con el pasar del tiempo.

Dicho padecimiento se ve reafirmado por la Carpeta de antecedentes entregados a la Comisión Valech II, denominados “carpeta valech”, correspondientes a doña Liliana María Castillo Rogers, instrumento que da cuenta que la demandante fue dirigente de diversas organizaciones sociales y de Derecho Humanos. En el mismo instrumento, se relata que el 13 de septiembre de 1973, se encontró con un grupo de grumetes de la marina que estaba disparando, recibiendo la demandante un disparo en la pierna izquierda. Detalla, que estuvo un mes hospitalizada, quedando con secuelas.

Además, fue detenida en marzo de 1985, permaneciendo 21 días en recintos de detención y 3 meses en relegación.

Fue detenida en una segunda ocasión entre el año 1986 y 1987, permaneciendo privada de libertad entre 12 o 15 días, siendo torturada.

Adicional a todo lo analizado en los párrafos precedentes, se debe tener presente también, que respecto de la materia que nos convoca, este daño moral es el único que se encuentra establecido por ley. Así, la Ley N° 19.123 reconoce clara e innegablemente la existencia de daño moral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a quienes se consideran causantes de los beneficios ahí establecidos, haciéndose extensivo a los familiares. Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema al indicar que los citados cuerpos legales de manera explícita reconocen la existencia de los daños a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares.

En consecuencia, por todo lo expresado, se encuentra ampliamente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado al demandante, en circunstancias de su detención, prisión política y torturas, cometido por agentes del Estado en tiempos de dictadura, ilícito ya reproducido en considerados previos de esta sentencia; debiendo rechazarse la excepción opuesta por el demandado relativa a la prueba del daño moral.



Foja: 1

Respecto al informe psiquiátrico de daños asociados a la violencia política, elaborado por la Psicóloga doña María Angélica Correa Cabrera, C.I.: 6.699.010-9, perteneciente a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), no habiendo sido reconocido en conformidad al artículo 346 N°1 del Código de Procedimiento Civil, se omitirá pronunciamiento al respecto.

Que, en cuanto a los documentos individualizados en el considerando quinto N°5, 6 y 7, todos referidos a las consecuencias de salud física y mental sobre las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Dictadura Militar, las que concuerdan en que eventos de detención, prisión política y tortura provoca un profundo sufrimiento psíquico, caracterizado por una intensa angustia, sensación de pérdida permanente en el tiempo, frustración, dolor en extremo aniquilante, desgarrador y autodestructivo, síntomas depresivos, desinterés en el mundo externo, familiar y laboral, pérdida de motivación, sentimientos de desamparo, vulnerabilidad y miedo de carácter persistente, ver a la estructuras estatales como organismos amenazantes, manifestaciones somáticas como dolores corporales crónicos, insomnio, lumbago, cefaleas, entre otros. Si bien estos informes son de carácter genérico, vienen a reforzar el daño moral legalmente existente que las víctimas directas de violaciones a los Derechos Humanos han padecido.

DÉCIMO QUINTO: Que, la demandada ha alegado que la suma sobre la que se pretende obtener una indemnización, resulta excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en estas materias y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia. Además, subsidiariamente alegó que la regulación del daño moral, debe considerar todos los beneficios consistentes en la reparación integral y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Que el oficio ORD DSGT N°26314/2024 agregado a folio 31, del Instituto de Previsión Social, emitido con fecha 20 de agosto de 2024, hace presente que doña Liliana María Castillo Rogers Run N°5.778.054-1, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura recibe una pensión de reparación como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados de la Comisión Valech, conforme a la Ley N°19.992, del aporte único por Ley 20.874, bono invierno y de aguinaldos.

Que, aun cuando pudiéramos estimar que la pensión vitalicia recibida viene a suplir parte del sufrimiento padecido por el demandante, el otorgamiento de dicha pensión se fundamenta en una norma de carácter general, estableciendo pensiones reparatorias para un universo de víctimas, no verificando la situación



Foja: 1

particular de cada individuo y por tanto, no podría estimarse que suple de forma razonable y suficiente la totalidad del daño.

En conclusión, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

Ahora, respecto al Aporte Único de Reparación recibido por la demandada en virtud a la Ley N°20.874, establece en su artículo 1 inciso 3° que *“Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura”*, por lo que habrá de considerarse el monto recibido por el demandante en este concepto, al momento de determinar las indemnizaciones pertinentes.

En consecuencia, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.992 y 20.874 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, correspondiendo a pagos de distinta naturaleza que cumplen con un objetivo diverso y que además emanan de una fuente distinta.

Así, habiendo establecido que no existe una incompatibilidad entre los beneficios otorgados voluntariamente por el Estado y las acciones judiciales que puedan hacer valer en Tribunales, la alegación de la demandada de tener en consideración pagos efectuados a terceros, solo será considerada parcialmente, en atención a lo analizado en los párrafos anteriores.

Por último y en lo referente a tener en consideración los montos establecidos por otros tribunales, cabe recordar que rige para todos los tribunales del país el principio de independencia. Que, el hecho de citar jurisprudencia en un fallo tiene por objeto simplemente reforzar los fundamentos que se plantean en cada sentencia individualmente, no operando en nuestro país la doctrina del stare decisis (ya sea horizontal o vertical). Tanto es así, que lo más cercano a ello puede encontrarse únicamente en el procedimiento laboral, en el que el legislador creó de forma extraordinaria el recurso de unificación de jurisprudencia, dando cuenta que ello constituye una excepción a la generalidad de nuestros procedimientos.

DÉCIMO SEXTO: Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por el actor, es necesario fijar su cuantía en dinero. Cabe señalar que la apreciación pecuniaria del daño moral, por la naturaleza del mismo, es compleja. El principio



Foja: 1

de reparación integral tiene limitaciones, no debiendo en aras a ser fiel a sus lineamientos, otorgar una indemnización excesiva o desmedida tornándose caprichosa o arbitraria y no cumpla con la exigencia de reparar en forma equitativa el daño sufrido.

Para esta materia, esta sentenciadora considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la Carpeta de antecedentes entregados a la Comisión Valech II, denominados "carpeta valech"; la cual da cuenta que doña Liliana María Castillo Rogers Run N° 5.778.054-1, fue detenida en reiteradas ocasiones; y que en el año 1973 recibió un disparo en su pierna izquierda, padeciendo secuelas hasta la fecha.

Que el documento analizado, permite presumir en conformidad al artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, y 1712 del Código Civil, las circunstancias descritas.

Que, el análisis anterior, es realizado con el objeto de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima de autos.

Que, asimismo, este tribunal comprende plenamente que las sumas de dinero que se concedan al actor en nada destierran el dolor y aflicción permanente sufrido por esta, debido a las conductas ilícitas ya narradas, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, agentes del Estado quienes por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de ellos.

En consecuencia, encontrándose acreditada la participación penal de los agentes del Estado que intervinieron en la detención del demandante, el Estado debe reparar el perjuicio ocasionado, cuya determinación concierne prudencialmente a este tribunal, toda vez que resulta imposible medir con exactitud la intensidad del sufrimiento provocado.

En atención a lo expuesto, se fijará la indemnización de perjuicios por daño moral que deberá pagar el Estado en favor de la demandante doña Liliana María Castillo Rogers Run N°5.778.054-1, en la suma de \$60.000.000.

Que, del monto fijado como indemnización, deberá restarse el Aporte Único de Reparación, recibido por el demandante, en virtud de la Ley N°20.874 y conforme lo dispone el inciso 3° del artículo 1 de la citada norma.



Foja: 1

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, las sumas ordenadas, se pagarán reajustadas de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, por lo que a este respecto, se acogerá la excepción deducida por la demandada. Respecto a los intereses legales, estos se devengarán desde la fecha en que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia y hasta la fecha de su pago efectivo, rechazándose la excepción opuesta respecto a su improcedencia.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en cuanto al resto de documentos, individualizados más no analizados en particular, en nada alteran lo resuelto por este tribunal, por lo que se omitirá pronunciamiento al respecto.

DÉCIMO NOVENO: Que, no habiendo resultado totalmente vencida, no se condenará a la demandada al pago de las costas.

Y, VISTO ADEMÁS lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes y 38° de la Constitución Política de la República; artículos 2332, 2515 y 2497 del Código Civil Chileno; artículo 4° de la Ley N° 19.653 de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.123, 19.980, 19.992 y 20.874; artículo 3 común de los Convenios de Ginebra; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 27° y siguientes de la Convención de Viena; artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, **SE RESUELVE:**

I.- Que se RECHAZA la excepción de reparación satisfactiva o pago a la actora.

II.-. Que se RECHAZA la excepción principal de prescripción de la acción civil de 4 años en virtud de lo dispuesto por el artículo 2332 del Código Civil.

III.- Que se RECHAZA la excepción subsidiaria de prescripción de la acción civil de 5 años en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil.

IV.- Que se ACOGE PARCIALMENTE la alegación subsidiaria de regulación que el daño moral debe considerar los beneficios consistentes en la reparación integral, solo en cuanto descontar de la indemnización, lo recibido por el Aporte Único de Reparación establecido en la Ley 20.874, rechazándose el resto de la alegación.

V.- Que SE ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral interpuesta a fojas 1, en contra del demandado Fisco de Chile, y SE CONDENA a



C-6220-2024

Foja: 1

éste a pagar en favor del demandante doña Liliana María Castillo Rogers Run N°5.778.054-1, en la suma de \$60.000.000 (sesenta millones de pesos) descontando lo percibido por concepto de Aporte Único de Reparación, como se señaló en el numeral anterior.

VI.- Que se RECHAZA la excepción de que la especial naturaleza que informa al daño moral que se alega, no exime a la parte de su carga de probar su efectiva procedencia.

VII.- Que la suma que se ordena indemnizar, se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha en que quede firme esta sentencia y el pago efectivo de la indemnización y devengará intereses legales desde la misma fecha y hasta su pago efectivo.

VIII. Que se ACOGE la alegación de improcedencia de pago de reajustes en la forma solicitada.

IX.- Que NO SE CONDENA en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad. -

C-6220-2024.

DICTADA POR DOÑA GABRIELA SILVA HERRERA, JUEZA TITULAR.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MXHKXRDEWKX

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro**

